

Bogotá, D. C.

Doctora

**RUTH GLADYS BOHÓRQUEZ FLECHAS**

**JUEZA 1ª PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE BOGOTÁ**

[j01pmgibt@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:j01pmgibt@cendoj.ramajudicial.gov.co)

Ciudad

**ASUNTO: CONTESTACIÓN ACCIÓN DE TUTELA No. 2025-00357**

**ACCIONANTE: NUBIA ESPERANZA CORREDOR LAITON Y SILVIA ROSA ORTIZ MARTÍNEZ**

**ACCIONADA: ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL, INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL – IPES Y CARVEPA S.A.S.**

**VINCULADAS: SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL y SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN**

**RADICADO INTERNO: 20254214145782**

**ID.**

**NOTA:** La Secretaría Distrital de Gobierno informa que, la cuenta de notificaciones de acciones de tutela [notificacionestutelas@gobiernobogota.gov.co](mailto:notificacionestutelas@gobiernobogota.gov.co) se encuentra habilitada exclusivamente para la recepción de las actuaciones proferidas en el curso de las acciones constitucionales de tutela que provengan de la Rama Judicial a la Secretaría Distrital de Gobierno.

**DIANA MARCELA ZARABANDA SUÁREZ**, identificada con cédula de ciudadanía N.º 53.105.459, Directora Jurídica de la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, de acuerdo con la Resolución 0152 de 03 de marzo de 2025 y posesionada en la misma fecha, en mi condición de representante para la gestión judicial y extrajudicial de **ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL**, de acuerdo con la delegación conferida en los artículos 120 y 130 del Decreto Distrital 479 de 2024, procedo a pronunciarme frente a la acción de tutela del asunto, previas las siguientes consideraciones:

## **I. REPRESENTACIÓN JUDICIAL**

Mediante Decreto Distrital 479 de 2024<sup>1</sup>, el Alcalde Mayor de Bogotá delegó en los/as Jefes/as y/o Directores/as de las Oficinas o Direcciones Jurídicas y/o Subsecretarios/as Jurídicos de las entidades y organismos distritales del sector central, la representación judicial y extrajudicial de Bogotá, Distrito Capital, con relación a sus respectivos organismos, para todos aquellos procesos, acciones de tutela, diligencias, y/o actuaciones judiciales, extrajudiciales o administrativas que se adelanten con ocasión de los actos, hechos, omisiones u operaciones que realicen, o en las que participen o que se relacionen con asuntos inherentes a cada uno de ellos, conforme a su objeto, misión y funciones, con las facultades, limitaciones y reglas previstas en el artículo 124 ibidem.

<sup>1</sup> Artículo 120

Respecto a la representación judicial y extrajudicial en la Secretaría Distrital de Gobierno, en el artículo 130 del Decreto 479 de 2024 se delegó dicha función en el/la Jefe de la Dirección Jurídica de la Secretaría Distrital de Gobierno la representación judicial y extrajudicial de Bogotá, Distrito Capital, con las facultades contempladas en el artículo 124 del mismo Decreto, exceptuando el numeral 4° del artículo 128, en relación con todos aquellos procesos, diligencias y/o actuaciones, judiciales, extrajudiciales o administrativas, que se adelanten con ocasión de los actos, hechos, omisiones u operaciones que expidan o realicen las Alcaldías Locales, las Juntas Administradoras Locales, los Fondos de Desarrollo Local y las Inspecciones de Policía.

Conforme lo anterior, la suscrita Directora Técnica, Código 009, Grado 07 de la Dirección Jurídica de la Secretaría Distrital de Gobierno, en ejercicio de la facultad para adelantar la representación judicial y extrajudicial de la Secretaría Distrital de Gobierno, con las potestades otorgadas en el artículo 124 del Decreto Distrital No. 479 de 2024, exceptuando el numeral 4° del artículo 128, en cumplimiento de la delegación otorgada y en aras de adecuar el trámite de la solicitud de amparo constitucional, manifiesto que la notificación de los autos y providencias que se emitan dentro del trámite de acciones de tutela promovidas contra la Secretaría Distrital de Gobierno, cuando esta o sus dependencias se encuentren accionadas o vinculadas, incluidas aquellas dirigidas contra Alcaldías Locales, Juntas Administradoras Locales, Fondos de Desarrollo Local e Inspecciones de Policía, se efectuarán a través de la Dirección Jurídica de la Secretaría Distrital de Gobierno.

## II. ANTECEDENTES

### 2.1. Derechos fundamentales invocados

Las ciudadanas **NUBIA ESPERANZA CORREDOR LAITON Y SILVIA ROSA ORTIZ MARTÍNEZ**, promovieron acción de tutela contra la **ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ**, la **ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL**, el **INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU**, el **INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL – IPES** y la sociedad **CARVEPA S.A.S.**, invocando el amparo de sus derechos fundamentales al trabajo, mínimo vital, debido proceso, confianza legítima e igualdad.

### 2.2. Hechos

Como fundamentos fácticos de la acción de tutela, la parte actora invoca los siguientes

*“PRIMERO. Las accionantes NUBIA ESPERANZA CORREDOR LAITON y SILVIA ROSA ORTIZ MARTINEZ son trabajadoras informales dedicadas a la venta de ropa en el espacio público ubicado en Carrera 6 #20a-41 sur, Bogotá, barrio 20 de julio, donde han desarrollado su actividad económica de manera pacífica, continua e ininterrumpida por más de diez (10) años, constituyendo este espacio su fuente principal y única de ingreso económico.*

*SEGUNDO. La señora NUBIA ESPERANZA CORREDOR LAITON es madre cabeza de familia y se encuentra en periodo de recuperación postparto, tras dar a luz el día 29 de noviembre de 2025. Su bebé es una menor de edad con protección reforzada constitucional, por lo que el sustento diario (servicios, alimentación, arriendo, entre otros) proviene de la actividad económica informal es indispensable para su mínimo vital y el de su bebe recién nacida.*

*TERCERO. Además, la accionante está clasificada en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBÉN IV, Grupo A – Pobreza Extrema, subgrupo A3, lo cual evidencia una situación de alta vulnerabilidad socioeconómica: (...)*

*CUARTO. La señora Silvia Rosa Ortiz Martínez es una adulta mayor de 63 años, vendedora informal en el mismo sector, quien no cuenta con pensión ni con ninguna otra fuente de ingresos. Su única forma de sustento es la actividad comercial que ejerce diariamente en su puesto tradicional de ventas, mediante la cual cubre sus gastos básicos de alimentación, salud y vivienda. Dada su edad y situación económica, se encuentra en una condición de especial protección constitucional, por lo que cualquier afectación a su lugar de trabajo compromete directamente su mínimo vital y su dignidad humana.*

*QUINTO. Las accionantes se encuentran identificadas y caracterizadas por la Alcaldía Local de San Cristóbal como trabajadoras informales del sector, y cuentan con la asignación y reconocimiento de este espacio de trabajo desde hace más de una década. La propia administración local les otorgó dicho punto para el ejercicio de su actividad comercial, razón por la cual han permanecido allí de manera estable, continua y pacífica, sin haber sido notificadas de procesos de desalojo, reubicación o modificación de su ubicación tradicional: (...)*

*SEXTO. En los últimos días, la Alcaldía Local de San Cristóbal, junto con el IDU, el IPES y el contratista CARVEPA S.A.S., iniciaron la instalación de casetas o módulos en el área exacta donde las accionantes han ejercido su actividad comercial por más de 10 años. Estas casetas pretenden ser utilizadas para reubicar a otros vendedores informales, vulnerando los derechos fundamentales de quienes ya se encuentran ubicadas en ese punto, previamente reconocidas, identificadas y caracterizadas por la misma Alcaldía Local como trabajadoras informales del sector.*

*Dicha intervención se encuentra actualmente en ejecución, tal como se evidencia en las siguientes imágenes que se aportan como prueba:*

*Caseta en proceso de instalación: (...)*

*Croquis o plano del área donde se proyecta la instalación de la caseta, señalando el punto del puesto de trabajo de las accionantes: (...)*

*Esta actuación administrativa sin aviso previo ni proceso de reubicación afecta de manera directa la continuidad de su única fuente de ingresos y desconoce el principio de confianza legítima en materia de espacio público.*

*SEXTO. Estas obras se están adelantando sin previo aviso, sin socialización, sin consulta con las personas que ocupan legítimamente ese espacio desde hace más de una década y sin ofrecer un proceso claro, formal ni real de reubicación, afectando gravemente su estabilidad laboral y la continuidad de un ingreso mínimo.*

*SÉPTIMO. Las accionantes han buscado información con funcionarios de la Alcaldía Local sobre su reubicación o alternativas para seguir trabajando, pero no han recibido respuesta concreta, ni se les ha informado si tienen derecho a un puesto o si serán desplazadas sin opción distinta.*

*OCTAVO. La intervención en el espacio, a través de maquinaria y obras ejecutadas por CARVEPA S.A.S., está reduciendo el espacio donde las accionantes ubicaban diariamente sus ventas, impidiéndoles desarrollar su actividad económica, lo cual afecta de manera directa e inminente su mínimo vital.*

*NOVENO. Esta actuación desconoce el principio de confianza legítima, reconocido por la Corte Constitucional para los vendedores informales que ocupan por largo tiempo un espacio público y respecto de quienes la Administración no puede adelantar intervenciones súbitas o lesivas sin una transición adecuada y alternativas reales de ubicación.*

*DÉCIMO. La situación reviste carácter urgente, pues tanto la adulta mayor como la madre en postparto dependen exclusivamente de su trabajo diario para subsistir. La falta de certeza sobre su reubicación deja a ambas en un escenario de desprotección total, poniendo en riesgo su vida digna y la de la recién nacida, vulnerando su derecho fundamental al trabajo, al mínimo vital*

*UNDÉCIMO. A la fecha, las entidades accionadas continúan con la instalación de casetas, lo que hace necesaria la intervención inmediata del despacho para evitar un daño consumado, pues cada día sin posibilidad de trabajar representa un impacto severo sobre el sustento básico de las accionantes.”.*

### 2.3. Pretensiones

De acuerdo con los hechos anteriores, las accionantes solicitan al juez de tutela:

*“Primero. Amparar los derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital, al debido proceso administrativo, a la confianza legítima y al derecho a la igualdad de las accionantes NUBIA ESPERANZA CORREDOR LAITON CC 1018415171 y SILVIA ROSA ORTIZ MARTINEZ CC 20441454, quienes ejercen actividades económicas como vendedoras informales y se encuentran plenamente identificadas y caracterizadas por la alcaldía local de San Cristóbal, entidad que les asignó el espacio que han ocupado por más de una década.*

*Segundo. Ordenar a la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, Alcaldía Local de San Cristóbal, Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, Instituto para la Economía Social – IPES y CARVEPA S.A.S. (Contratista ejecutor de la obra), suspender cualquier actuación orientada al retiro, desalojo, desmonte o restitución del espacio donde históricamente han ejercido su actividad económica, hasta tanto se surta un debido proceso real y efectivo, respetando los parámetros fijados por la Corte Constitucional, especialmente en lo referente a la motivación clara de los actos administrativos, el deber de notificación personal, el principio de confianza legítima y la obligación de alternativas económicas reales para los vendedores informales.*

*Tercero. Ordenar a la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, Alcaldía Local de San Cristóbal, Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, Instituto para la Economía Social – IPES y CARVEPA S.A.S. (Contratista ejecutor de la obra), garantizar a las accionantes una alternativa económica o reubicación adecuada, proporcional y efectiva, que tenga en cuenta su condición de mujeres trabajadoras informales de larga trayectoria en el territorio, conforme a los estándares jurisprudenciales establecidos por la Corte Constitucional.*

*Cuarto. Adoptar como medida provisional, de manera inmediata, la suspensión de cualquier instalación, construcción o adecuación de casetas en el lugar ubicado en la Carrera 6 #20A-41 Sur, barrio 20 de Julio, Bogotá, para evitar un perjuicio irremediable consistente en la pérdida abrupta del único medio de subsistencia de las accionantes.*

*Quinto. Ordenar que, mientras se resuelve de fondo esta acción, se garantice la permanencia de las accionantes en el lugar donde ejercen su actividad económica, evitando actos de perturbación, presión, hostigamiento, desalojo o desplazamiento por parte de cualquier autoridad o contratista.*

*Sexto. Las demás órdenes que el despacho considere necesarias para la protección integral de los derechos fundamentales vulnerados.”.*

### III. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS HECHOS Y LAS PRETENSIONES

Mediante mensaje recibido en el correo electrónico para notificaciones judiciales de la Secretaría Distrital de Gobierno, se notificó la admisión de la acción de tutela incoada por las señoras **NUBIA ESPERANZA CORREDOR LAITON y SILVIA ROSA ORTIZ MARTÍNEZ**, contra la **ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL** y otras entidades.

En virtud de lo anterior, mediante memorando N.º **20255430198153** de 16 de diciembre de 2025, la **ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL**, se pronunció sobre los hechos y pretensiones del escrito de tutela, en los siguientes términos:

*“El Despacho de la Alcaldía Local de San Cristóbal se abstiene de emitir pronunciamiento respecto de los hechos narrados en el escrito de tutela, en tanto los mismos resultan ajenos a su ámbito de competencia y conocimiento. Lo anterior, debido a que las accionantes refieren circunstancias de tiempo, modo y lugar frente a las cuales esta Administración no se encuentra en capacidad de dar fe, confirmar o desvirtuar.*

*De igual manera, las accionantes manifiestan contar con la asignación y reconocimiento del espacio en el cual han desarrollado su actividad durante aproximadamente diez (10) años. Al respecto, es preciso señalar que la Alcaldía Local de San Cristóbal carece de competencia para asignar o adjudicar el uso del espacio público a particulares, toda vez que sus funciones se circunscriben a la protección, recuperación, conservación y defensa del espacio público, de conformidad con la normatividad vigente.*

*Por otro lado, señalan las accionantes que, pese a encontrarse caracterizadas, no se les suministró información relacionada con la instalación de las casetas, ni se les ofrecieron alternativas de reubicación. Frente a lo anterior, resulta pertinente precisar que la Alcaldía Local de San Cristóbal no se encuentra facultada para adelantar procesos de caracterización ni para brindar la correspondiente oferta institucional a vendedores informales, por cuanto dichas funciones recaen exclusivamente en el Instituto para la Economía Social –IPES–. En el mismo sentido, corresponde de manera exclusiva a dicha entidad el proceso de instalación de los módulos o casetas a los que hacen referencia las accionantes en su escrito de tutela. (...)*

*En tal sentido, respetuosamente solicito al señor juez, tener en cuenta el principio de competencia administrativa emanado de la Ley 489 de 1998, por el cual cada organismo y entidad pública debe ejercer las potestades y atribuciones inherentes a la labor que desarrolla en virtud de los parámetros normativos; de la misma forma y en virtud del principio de coordinación, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones.*

*En el caso particular de los Alcaldes Locales, se debe tener en cuenta las competencias contenidas en el artículo 86 del Decreto Ley 1421 de 1993, modificado por el artículo 11 de la Ley 2116 de 2021. De tal manera que no es dable ordenar cumplimiento alguno, por cuanto las pretensiones recaen sobre el Instituto para la Economía Social - IPES.*

*Es por ello que en forma respetuosa se solicita declarar la “FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA”, como quiera que a pesar de la informalidad que caracteriza la acción de tutela, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reconocido la existencia de unos requisitos mínimos de procedibilidad, los cuales deben encontrarse satisfechos para que el juez constitucional pueda entrar a resolver de fondo los casos que sean allegados a su despacho.*

*La acreditación de la legitimación en la causa de las partes para actuar procesalmente, ya sea en calidad de accionante (legitimación por activa) o de accionado (legitimación por pasiva), es uno de los requerimientos que deben ser objeto de análisis por el juez de tutela frente a cada asunto sometido a su consideración; por tanto, la legitimación por pasiva dentro del trámite de la acción de tutela hace referencia a la capacidad legal del destinatario de la acción para ser demandado, pues está llamado a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental en el evento en que se acredite la misma en el proceso.*

*Diferentes decisiones sobre la falta de legitimación en la causa por pasiva se pueden consultar en las sentencias: T-462 DE 1996; Auto No. 312 del 2001; T-519 del 2001; T-1001 del 2006 de la Honorable Corte Constitucional; Consejo de Estado, en decisión adoptada en el proceso con radicado 76001-23-25-000-1997-03056-01.*

*Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia T-1015 de 2006, MP. Dr. ALVARO TAFUR GALVIS, indicó: (...)*

*Con lo anterior se evidencia la abundante jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional y el Consejo de Estado, en la que se pronuncia frente a la falta de legitimación en la causa por pasiva; es esta la razón por la que al advertir que la Alcaldía Local de San Cristóbal no es responsable de la vulneración de los derechos fundamentales alegados por la accionante, no puede ser sujeto pasivo de la acción de tutela, pues no existe nexo de causalidad entre la vulneración y la actuación activa u omisiva por parte de la accionada.*

#### CONCLUSIONES

*Atendiendo el escrito de tutela, respecto a la Alcaldía Local de San Cristóbal se propone la excepción denominada FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, toda vez que carece de competencia para atender las pretensiones del accionante, sobre solicitudes que recaen sobre el Instituto para la Economía Social - IPES.*

*Se advierte LA INEXISTENCIA DE DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS por parte de la ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL, al encontrarse demostrado que, en los hechos y pretensiones indicados en el escrito de acción de tutela, no tiene competencia o injerencia alguna.”.*

#### IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Conforme lo anterior, en mi calidad de representante para la gestión judicial y extrajudicial de la **ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL**, me opongo a las súplicas de las accionantes frente a mi representada, por no haber incurrido en ninguna actuación u omisión que vulnere sus derechos fundamentales, así como por carecer de legitimación en la causa por pasiva, de conformidad con los argumentos que a continuación se exponen:

##### 4.1. FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA

Revisado el escrito de tutela, se advierte que la **ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL** carece de competencia para pronunciarse o adelantar actuación alguna frente a las pretensiones de las accionantes, por no tener injerencia en el proceso de caracterización a que aluden en el escrito de tutela, ni estar facultada para brindar la oferta institucional a vendedores informales, por recaer tales funciones en el Instituto para la Economía Social – IPES, así como lo relativo a la instalación de los módulos o casetas que refieren las accionantes en su escrito, sin que pueda predicarse de

mi defendida alguna clase de atribución o competencia frente a las pretensiones de las tutelantes orientadas a i) *suspender cualquier actuación orientada al retiro, desalojo, desmonte o restitución del espacio donde históricamente han ejercido su actividad económica; ii) garantizar a las actoras una alternativa económica o reubicación adecuada, proporcional y efectiva, que tenga en cuenta su condición de mujeres trabajadoras; o iii) suspender instalación, construcción o adecuación de casetas*, por no estar enmarcadas tales actuaciones en las atribuciones de esa alcaldía local, de conformidad con el Decreto Distrital 411 del 2016 y el artículo 86 del Decreto Ley 1421 de 1993, modificado por el artículo 11 de la Ley 2116 de 2021.

En tal virtud, se configura respecto de la **ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL** la excepción de **FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA**, conforme al artículo 5° del Decreto 2591 de 1991, que dispone que la acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades que vulnere o amenace con vulnerar un derecho fundamental, sobre lo cual ha dicho la jurisprudencia que la correcta identificación de la autoridad o persona presunta responsable de la amenaza o violación al derecho fundamental, es necesaria para asegurar la legitimación en la causa por pasiva en la acción de tutela, pues de ello depende que el juez que conoce tal acción, pueda efectuar un pronunciamiento estimatorio de las pretensiones de la parte actora.

Por su parte, la Corte Constitucional, en Sentencia C-396 de 2006 (M.P. Jaime Araujo Rentería), indicó: *“Las funciones públicas otorgadas a los órganos del Estado deben estar previamente señaladas en la Constitución, la ley o el reglamento. En consecuencia, cualquiera acción que ejecute un órgano del Estado sin estar previamente indicada en las normas mencionadas constituye una acción inconstitucional, ilegal o irreglamentaria por falta de competencia. Igualmente, cualquier acción que provenga de un desbordamiento de la función asignada constituye una extralimitación de la función pública.”*.

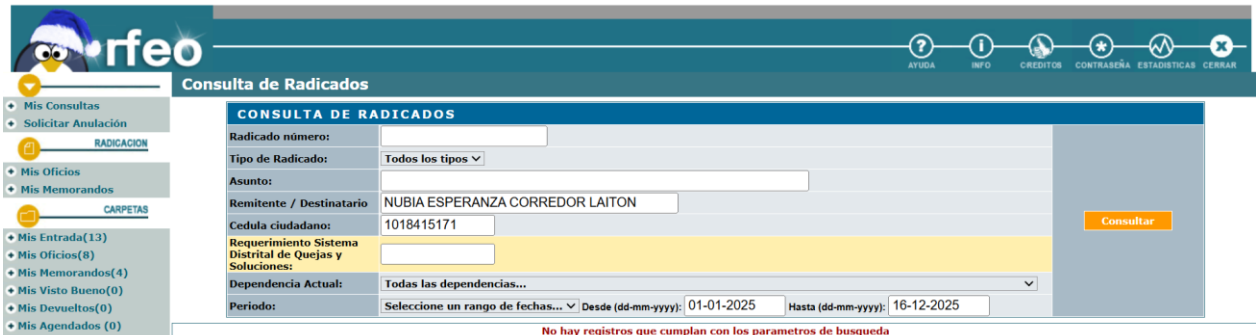
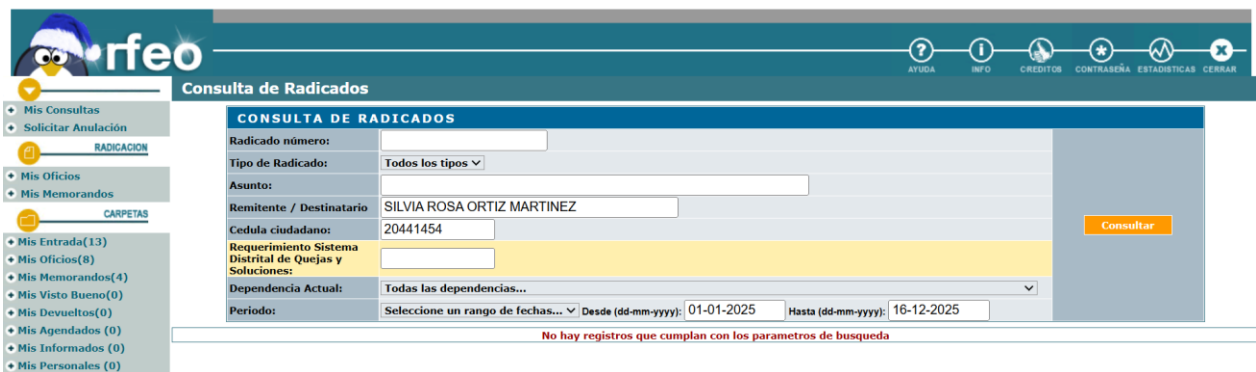
En lo que se refiere a la falta de legitimación en la causa por pasiva, mediante Auto 312 de 2001, la Corte Constitucional, señala: *“Acorde con los principios básicos del derecho procesal, especialmente con el denominado “legitimidad en la causa por pasiva”, las obligaciones jurídicas son exigibles respecto de quien se encuentra expresamente llamado por la ley o el contrato a responder por ellas. Así las cosas, para que la acción judicial se abra camino en términos de favorabilidad, es necesario que -además de que se cumplan otros requisitos- exista una coincidencia de derecho entre el titular de la obligación pretendida y el sujeto frente a quien dicha conducta se reclama.”*.

Finalmente, de acuerdo con la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, cuando del trámite procesal se deduzca que el o los accionados no son responsables de los hechos que se les endilgan, y del presunto quebrantamiento de derechos fundamentales y/o causantes de un perjuicio irremediable, no deberá adelantarse la tutela en su contra, al no existir nexo causal entre el mecanismo constitucional y la omisión o acción generadora de la amenaza de los derechos fundamentales. Es así como, en el sub judice, resulta improcedente la acción de tutela de la referencia, por falta de legitimación en la causa por pasiva, como antes se expuso.

#### **4.1. INEXISTENCIA DE DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS**

En consonancia con lo anterior y en atención a lo manifestado por la **ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL**, se procedió a consultar el Sistema de Gestión Documental de la Entidad - **ORFEO**, con los datos personales de las tutelantes, encontrando que no existen registros de ningún trámite

o petición impulsada por aquellas en relación con los hechos del escrito de tutela, como se aprecia a continuación:

Consecuentemente, no se entrevé afectación a los derechos fundamentales de la tutelante, o que estos se hallen en inminente riesgo por la actuación u omisión de mi representada, generando la necesidad de acudir a la acción de tutela para evitar un perjuicio irremediable, presupuesto este que es necesario para la procedencia del mecanismo constitucional de defensa, conforme ha sido desarrollado por la H. Corte Constitucional en la sentencia T-787 de 2003 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), de la siguiente manera:

*“Procederá la acción de tutela en tanto mecanismo transitorio para prevenir la ocurrencia de un perjuicio irremediable. El alcance de este mandato también ha sido delimitado en detalle por la jurisprudencia constitucional, la cual ha establecido que un perjuicio tendrá carácter irremediable cuandoquiera que, en el contexto de la situación específica del peticionario, llene las siguientes características: (i) ser cierto e inminente, es decir, que su existencia actual o potencial se infiera objetivamente a partir de una evaluación razonable de hechos reales, y no de meras conjeturas o deducciones especulativas; (ii) ser grave, en la medida en que amenace con lesionar –o lesione– un bien o interés jurídico de alta importancia para el afectado; y (iii) requerir la atención urgente de las autoridades, en la medida en que su prevención o mitigación resulte indispensable e inaplazable para evitar la generación de un daño antijurídico que posteriormente no podrá ser reparado. Salta a la luz que la peticionaria en el caso bajo*

*revisión se encuentra, efectivamente, en riesgo de sufrir un perjuicio irremediable con motivo de los hechos que dieron lugar a la interposición de la acción de tutela, puesto que del reconocimiento de la sustitución pensional a la cual alega tener derecho depende la satisfacción de su mínimo vital.”.*

De lo expuesto se colige que mi defendida no ha incurrido en vulneración alguna a los derechos fundamentales de la actora; por lo contrario, en cada una de sus actuaciones se aprecia el respeto por las garantías constitucionales que le puedan asistir a la tutelante y sus representadas, por lo que el mecanismo constitucional invocado pierde la finalidad para la que fue creado, al no haberse probado la afectación o inminente violación de derechos fundamentales por parte de mi prohijada.

#### **4.3. IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA POR EXISTIR OTROS MECANISMOS DE DEFENSA (SUBSIDIARIEDAD)**

Finalmente, nos permitimos señalar que, frente a las pretensiones del tutelante, la acción de tutela se constituye en un medio inadecuado para su realización, en tanto dispone de otros mecanismos para formular reclamos como los del escrito de tutela, como son las instancias ordinarias ante las autoridades administrativas encargadas de la caracterización y reubicación deprecadas, en este caso el Instituto para la Economía Social – IPES, pues la acción de tutela, por su carácter residual, no puede reemplazar las acciones ordinarias o desplazar actuaciones administrativas o judiciales instituidas para el amparo de derechos de naturaleza como los que invoca la parte actora.

Lo anterior, atendiendo al hecho de que la acción de tutela tiene la característica de ser subsidiaria o residual, es decir que, ante la existencia de otro mecanismo de defensa, no se puede utilizar la acción de tutela como mecanismo principal, ni se puede utilizar para eludir los procedimientos ordinarios, máxime cuando no se prueba que esta haya sido presentada como medio transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Por regla general, la acción de tutela es un mecanismo de amparo frente al desconocimiento o peligro inminente de vulneración de un derecho fundamental de personas naturales o jurídicas, pero bajo ninguna circunstancia puede ser una herramienta que el interesado use para adelantar el trámite a que haya lugar ante la Justicia Ordinaria o Administrativa; por tanto, se hace especial y reiterado énfasis en el hecho de que este no es, bajo ninguna óptica, el instrumento jurídico apropiado para conseguir la protección de derechos que le puedan asistir a la accionante.

En este sentido, la regla general es que este mecanismo constitucional de protección no puede superponerse a los mecanismos ordinarios establecidos en el ordenamiento jurídico, de forma que los suplante o actúe como una instancia adicional para debatir lo que se está discutiendo en sede ordinaria o administrativa. Es así que la Corte Constitucional ha insistido en que, por regla general, en los procedimientos administrativos la tutela no procede contra actos expedidos por una autoridad administrativa:

*“La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en línea de principio, que este amparo no es la senda idónea para censurar decisiones de índole judicial; sólo, excepcionalmente, puede acudir a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinación «con ostensible desviación del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure “vía de hecho”», y bajo los supuestos de que el afectado concorra dentro de un término*

*razonable a formular la queja, y de que «no disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo» (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00). (...)» STC11020-2017, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Magistrada Ponente Margarita Cabello Blanco.*

Al respecto se ha pronunciado la Corte en varias ocasiones, entre ellas se destaca la Sentencia T-983 de 2001, que reza:

*“Esta Corporación ha señalado reiteradamente que la acción de tutela no procede cuando el peticionario disponga de otro medio para la defensa judicial de su derecho, a menos que intente la acción como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Al respecto, la Corte ha hecho énfasis en el carácter excepcional del mecanismo constitucional de protección que no debe superponerse ni suplantar los mecanismos ordinarios establecidos en nuestro ordenamiento jurídico. (...)”.*

Asimismo, en sentencia del 26 de febrero de 2015 (C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez), Radicación 11001-03-15-000-2014-04068-00), el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Segunda – Subsección B, indicó:

*“Debe señalarse que la Corte Constitucional ha sostenido por regla general la improcedencia de la acción de amparo contra los actos de trámite, en la medida en que estos no expresan en concreto la voluntad de la administración y pueden ser susceptibles de control por parte del Juez Natural del asunto en el evento de atacar la legalidad del acto administrativo definitivo que define una situación particular... La acción de amparo constitucional procede excepcionalmente contra actos administrativos de trámite cuando aquellos han sido proferidos con total desconocimiento de las garantías previstas en el ordenamiento jurídico para la satisfacción del derecho fundamental al debido proceso de quien interviene en el trámite administrativo... la acción de tutela deviene en un mecanismo definitivo de defensa judicial contra el acto administrativo de trámite a efectos de permitir al administrado el ejercicio de las garantías del debido proceso; lo anterior, bajo el entendido que el juez de tutela no puede interferir en la decisión definitiva que deba adoptar la Administración una vez culminado el trámite sancionatorio y sustituir, por tanto, el control posterior de legalidad que, sobre el mismo, le corresponde ejercer al juez de lo contencioso administrativo... El Juez de tutela, por excepción, puede suspender la aplicación de estos actos administrativos en los siguientes eventos: como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, cuando éste se alegue y se pruebe dentro del proceso por la parte accionante artículo 8 del Decreto 2591 de 1991, o como mecanismo definitivo, cuando la acción principal no sea eficaz e idónea para la defensa judicial de quien demanda. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 6 NUMERAL 5 / DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 8”.*

## V. CONCLUSIONES

Conforme a lo anterior, se solicita al señor juez de tutela **DECLARAR LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA** por la **EXISTENCIA DE OTROS MECANISMOS DE DEFENSA**, habida cuenta lo evidenciado sobre los medios de que disponen los accionantes para el amparo de sus derechos, como son las instancias ordinarias ante las autoridades administrativas encargadas de la caracterización y reubicación deprecadas.

De manera subsidiaria, solicitamos **DENEGAR LAS PRETENSIONES** de la acción de tutela, en atención a la **INEXISTENCIA DE DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS** por parte de mi representada, habida cuenta lo evidenciado en párrafos precedentes respecto a la inexistencia

de trámites o peticiones promovidas por tales ciudadanas ante la Alcaldía Local vinculada, o ante cualquiera de las dependencias de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Finalmente, al no tener injerencia en el objeto del litigio, por las razones anotadas en precedencia, solicitamos **DESVINCULAR** del trámite de tutela a la **ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL**, por configurarse respecto de ella la **FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA**, de acuerdo con las funciones y competencia a ella asignadas en el Decreto Distrital 411 del 2016 y artículo 86 del Decreto Ley 1421 de 1993, modificado por el artículo 11 de la Ley 2116 de 2021.

## VI. PETICIONES

Con base en los argumentos previamente esbozados, solicitamos a su señoría:

**1. DECLARAR IMPROCEDENTE** la acción de tutela del asunto, por disponer los actores de otros mecanismos de defensa para la garantía de sus derechos. Subsidiariamente, solicito **DENEGAR** las pretensiones de la acción de tutela, por **INEXISTENCIA DE DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS** atribuible a mi representada, conforme las razones anotadas en precedencia.

**2. DESVINCULAR** del presente trámite de tutela a la **ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL**, por configurarse respecto de ella la **FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA**.

## VII. ANEXOS

1. Documentos relativos a la representación judicial y extrajudicial de la Entidad.
2. Memorando **20255430198153** de 16 de diciembre de 2025, por el cual la **ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL** emite pronunciamiento sobre la acción de tutela del asunto.
3. Consultas efectuadas en el Sistema de Gestión Documental de la Entidad (**ORFEO**) con los datos de identificación de las accionantes.

## VIII. NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la sede de la Secretaría Distrital de Gobierno ubicada en la calle 11 N.º 8 - 17 de esta ciudad (Centro de Documentación e Información - C.D.I.) y por conducto del correo electrónico [notificacionestutelas@gobiernobogota.gov.co](mailto:notificacionestutelas@gobiernobogota.gov.co).

Sin otro particular,



**DIANA MARCELA ZARABANDA SUÁREZ**

Directora Jurídica

Secretaría Distrital de Gobierno

Proyectó: Nevardo Parada Olarte - Contratista - SDG

Revisó: Yadira Fernanda Arias Espinosa -Contratista – SDG